



José Luis Reyna

¿Guerra perdida?

La violencia sigue en ascenso. De acuerdo con los datos oficiales creció 117 por ciento respecto del año pasado. Sin duda es una guerra: supe-ramos a Irak en número de bajas. No es noticia que todos los días haya muerte; ésta se volvió rutina. Parte de la cotidianidad. En Chihuahua, en Sinaloa, aquí en la capital del país. Las organizaciones criminales no ceden, pese al embate del Estado y la fuerza de la que (dicen) dispone éste. El crimen organizado se expande y, además, se trasnacionaliza. De acuerdo con lo que día a día sabemos, algunas áreas de los aparatos de seguridad han estado bajo el control de la delincuencia. Miembros importantes de estas instituciones han estado al servicio de ésta.

Además, los cárteles mexicanos operan en Centroamérica, en Argentina, y su actividad empieza a preocupar a algunos gobiernos de Europa. El jefe de la Unidad Antidroga de la Unión Europea sostiene que los *narcos* mexicanos se han diversificado. Tienen contacto con grupos criminales del viejo continente. En pocas palabras, se están globalizando. Los mexicanos, en el *oficio* vinculado con el tráfico de estupefacientes resultaron mejor que los *maestros* colombianos. Hoy en día, las organizaciones del país sudamericano son subsidiarias de las mexicanas.

En los años 80 y 90 los colombianos tuvieron la supremacía del control y comercialización de los estupefacientes. A partir de esta última década fueron desplazados paulatinamente por las organizaciones mexicanas. No hay que ir muy lejos para encontrar una explicación: la corrupción se generalizó y penetró a los aparatos de seguridad nacionales. Ejemplos sobran. De acuerdo con algunos datos, 80 por ciento de las policías del país no aprueban los controles de confianza. Así fue señalado en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados (*El Universal online*, 8/XII/08). No resulta sorpresivo, por

tanto, que México ocupe el tercer lugar en el mundo en cuanto a corrupción: sólo lo aventajan China y Rusia. Y tampoco llama la atención que la institución que se percibe como la más corrupta de todas en México es precisamente la de los cuerpos policiacos (*MILENIO Diario*, 10/XII/08).

Hay que señalar que el problema no es sólo del Estado y sus aparatos de (in)seguridad. La adicción de la sociedad es otro flanco que no puede marginarse, si el problema quiere entenderse a cabalidad. Un estudio hecho en Estados Unidos arrojó cifras dignas de tomarse en cuenta: en 1970 se encontró que 4 millones de estadounidenses, equivalentes a 2 por ciento de la población en ese momento, reconocieron haber consumido alguna vez (o muchas) una droga ilegal. En

Las organizaciones criminales siguen nadando en abundancia de recursos y pertrechándose de armamento sofisticado importado del norte

2007, la cifra creció de manera más que espectacular: 114 millones de habitantes del país vecino tuvieron contacto con las drogas, lo que equivale a 46 por ciento de la población. Con base en estos datos, algunas autoridades de ese país empiezan a reconocer que la guerra contra las drogas "es un fracaso", pues el consumo no cede y la demanda se incrementa. (<http://noticias.terra.com/articulos>, 8/XII/08).

La administración presidencial actual sabe de la magnitud del problema. Por lo

Continúa en siguiente hoja



mismo ha decidido apostarle a una institución más confiable (o menos vulnerada) que las demás: el Ejército. Eso explica la designación del general Del Real Magallanes como subsecretario de Estrategia e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Es sabido que en esta institución, muchos servidores de alto nivel, incluso cercanos al propio secretario, han prestado servicios a la delincuencia.

La llegada del Ejército a este organismo es un indicador de que los funcionarios civiles no están cumpliendo con la función encomendada. El nuevo subsecretario tendrá bajo su mando a 27 mil policías federales, quienes deberían pasar por alguna prueba de confianza para que el general realmente pueda desempeñar una estrategia de inteligencia realista en contra de las organizaciones criminales. El militar designado para este puesto neurálgico tiene un reto difícilmente comparable con otro funcionario de su nivel: va a un campo de batalla que no encaja en la definición militar.

Que un miembro de las fuerzas armadas haya llegado a un puesto tan importante en la SSP acusa la incapacidad de los civiles para enfrentar el reto que la negligencia y la corrupción les ha puesto enfrente. Acusa, además, que al Ejército se le está encomendado tareas que no son propias de la institución. Sin embargo, ante la podredumbre de los funcionarios civiles la única alternativa que quedó fue recurrir a la milicia.

El procurador general de la República reconoce que la violencia no ha llegado al nivel que puede alcanzar. No se ha tocado fondo. Las organizaciones criminales, mientras tanto, siguen nadando en abundancia de

recursos y pertrechándose de armamento sofisticado importado del norte. Dadas las cifras de violencia que se observan día a día, la pregunta inevitable es: ¿se trata de una guerra perdida? ■M

jreyna@colmex.mx

